



Rama Judicial Del Poder Público
JUZGADO TREINTA Y UNO (31) CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Bogotá D.C., febrero ocho (8) de dos mil veintitrés (2023)

VERBAL No. 110014003031-2020-00519 00

I. ASUNTO

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, incoado por el extremo pasivo en contra del auto de fecha 06 de diciembre de 2022 proferido al interior de la demanda **DECLARATIVA** promovida por **JORGE VARGAS CRUZ** en contra de **FABIO RIVERA VELEZ**.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Ante este despacho acude el señor Fabio Rivera Vélez, quien actúa en causa propia para que se revoque el proveído indicado, a través del cual el juzgado admitió la reforma de la demanda presentada por la apoderada judicial del señor, Jorge Vargas Cruz y se corre traslado al demandado del dictamen pericial aportado por el extremo demandante.

El recurrente fundamenta su inconformidad en el artículo 93 del Código General del Proceso, pues aduce que el día 07 de abril de 2021 el juzgado había señalado fecha y hora para llevar a cabo audiencia inicial, luego, en su sentir, no es dable la admisión de la reforma de la demanda, más cuando en su sentir, se realizó un control de legalidad que benefició a la parte demandante. De otra parte, alega que la providencia de la que se queja, apertura a pruebas sin que se hubiese fijado el litigio, ni intentado la conciliación, mucho menos el decreto de pruebas. Relato los motivos que lo conllevan a presentar recusación y la nulidad, en tanto no se siente seguro con las decisiones adoptadas por la titular del juzgado. Finalmente solicitó el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 121 del Código General del Proceso.

III. CONSIDERACIONES

El recurso de reposición consagrado en el artículo 318¹ del C.G.P. persigue que “*se revoquen o reformen*” los autos que dicte el Juez. Tal

¹ ARTÍCULO 318. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen. El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja. El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto. El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse

disposición se instituye como un medio de impugnación, mediante el cual el mismo juzgador que profirió una providencia puede revocarla o reformarla por los eventuales yerros en que pudo haber ocurrido.

Por otra parte, se advierte que las leyes del procedimiento civil son de orden y derecho público, motivo por el que no pueden ser inobservadas en su aplicación².

Para resolver, es preciso memorar las disposiciones del artículo 93 del Código General del Proceso, que a su tenor literal reza: “*El demandante podrá corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento, desde su presentación y **hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial.***” (negrilla y subrayado del juzgado).

Bajo esta premisa encuentra este despacho, desatinados los argumentos sobre los cuales se cimenta el recurso de reposición, pues pasa por desapercibido el inconforme que, mediante proveído del 16 de noviembre de 2022, luego de efectuar el control de legalidad que debe procurarse dentro de las actuaciones procesales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 42 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 132 *ibidem*³, el juzgado tras advertir importantes falencias en el trámite procesal, se apartó de los efectos del auto adiado 07 de abril de 2021 -*Anexo06*- a través del cual se había fijado fecha y hora para realización de la audiencia que trata el artículo 372 del Código General del Proceso haciendo a un lado aspectos de trascendencia procesal que eventualmente mutarían en eventuales causales de nulidad y que de contera, lesionan el debido proceso que debe imperar en las actuaciones procesales.

Ahora, valga precisar y recordar que el citado auto no fue objeto de recurso ni controversia por los enfrentados en contienda, muy por el contrario, fue el mismo togado y a su vez demandado, señor Fabio Rivera Vélez, quien dio cabal y fiel cumplimiento al requerimiento que en aquella oportunidad se hiciera por parte del despacho, para lo cual en documento que milita en el *anexo22* de la encuadernación asumió su propia representación judicial, por lo que resulta inexorable, que el momento oportuno para enrostrar inconformidad en punto al control de legalidad efectuado, venció en silencio, conducta que desde luego no le es dable

los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos. Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria. PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.

² ARTÍCULO 13. OBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES. Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales, no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda. Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se tendrán por no escritas.

³ Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación

desplegar a través del recurso de reposición contra el auto que con posterioridad se emitió.

Se reitera, valga la pena aclarar, que este juzgado, una vez avocó conocimiento de la actuación, luego de dirimirse el impedimento presentado por la suscrita Juez, procedió, en garantía de las partes, a realizar el control de legalidad correspondiente, como quiera que con los yerros allí advertidos era inviable llevar a cabo la audiencia inicial, dando cumplimiento así al numeral 5° del artículo 42 del estatuto de ritos en lo civil que dispone, como deber para el Juez, “*Adoptar las medidas autorizadas en este código **para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos**, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia*” (Subraya y negrita fuera de texto), como en efecto acá acaeció, pues para ese momento era evidente una indebida representación del extremo demandado a voces del numeral 4° del artículo 133 ejúsdem.

En consecuencia, el auto atacado, a través del cual se admitió la reforma de la demanda, no está viciado de ninguna irregularidad procesal alguna que tenga la suficiente fuerza para su revocatoria, si se tiene en cuenta que la parte actora se allanó al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 93 *ibídem* tal como quedó enunciado en el numeral cuarto del proveído fustigado y no se observa vulneración al debido proceso ni a la seguridad jurídica como lo expresa el recurrente.

Ahora, con relación a la apertura de pruebas a que se refiere el impugnante en su escrito, no se advierte ninguna irregularidad en el trámite que se otorgó al dictamen pericial presentado por el demandante, puesto que debe recordar el profesional del derecho, lo previsto en el artículo 227 del Código General del Proceso, según el cual: “*La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas (...)*”, evento que acá sobrevino por virtud de la reforma presentada por el demandante con la que se adujo dictamen pericial, este juzgado procedió al tenor de lo dispuesto en la preceptiva normativa contenida en el artículo 228 ejúsdem que establece: “*La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. **Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento***”, como acá acaeció, sin que le asista razón al togado cuando insinuó que esta Jueza procedió de manera irregular, máxime que por contraste lo que acá ocurrió, no fue otra cosa distinta a la materialización del traslado de un dictamen pericial aportado con la demanda por parte demandante tal y como lo ordena un mandato legal, esto en garantía, precisamente, del debido proceso en lo que se refiere al ejercicio de la defensa a través de la contradicción; y, de paso, en aplicación de los principios procesales de economía y celeridad.

Lo anterior se acompasa con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, que mediante sentencia STC-2066-2021 dentro del radicado 05001-22-03-000-2020-00402-01 explicó que:

En lo que puntualmente concierne al dictamen pericial, este tiene por objeto llevar al juez información cuando el campo del conocimiento del que se extraiga no sea de su dominio, puesto que con él es posible obtener un concepto fundado en el método científico, el arte o la técnica; cuyas conclusiones incidirán en la adopción de la decisión que dirima el conflicto planteado, según lo dispone el artículo 226 del Código General del Proceso
(..)

A voces del artículo 227 de la Ley 1564 de 2012 la parte que pretenda valerse de una experticia deberá aportarla en la respectiva oportunidad. Esto es, el actor en su demanda (art. 82) o en el término para solicitar las adicionales (art. 370), y el convocado con su contestación (art. 96); o, cualquiera de ellos, dentro del plazo especial del artículo 227

(...)

En lo que respecta a su decreto, con miramiento en el artículo 168 ibidem, regla general y, por tanto, aplicable a cualquier medio de prueba, el juez rechazará la que encuentre ilícita, notoriamente impertinente, inconducente y la manifiestamente superflua o inútil. Todo lo cual realizará con la debida motivación.

Ya en punto de la contradicción, el litigante contra el cual se aduzca podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia de instrucción y juzgamiento, aportar otro o realizar ambas actuaciones, con sujeción a las reglas estipuladas en el canon 228.

Por último, terminada esta fase y escuchados los alegatos finales de las partes, cuando a ello haya lugar, el fallador apreciará el dictamen en su sentencia; labor que emprenderá de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en la que evaluará la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, así como las demás pruebas que obren en el proceso (art. 232).

Desde luego ninguna norma de carácter procesal impone que el traslado del dictamen pericial deba estrictamente surtirse en la audiencia inicial, puesto que en las actuaciones procesales deben prevalecer los principios procesales (economía procesal, celeridad, entre otros) aunado a que el ejercicio de la contradicción de dicho medio de prueba a la luz del atrás transcrito artículo 228 de la obra procesal general del proceso, debe surtirse **“dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento”** como acá acertadamente lo efectuó el juzgado.

Finalmente, en lo que se refiere a la aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso, y aunque si bien, no está directamente relacionado con el objeto de la censura, en aplicación a la prevalencia del derecho sustancial pregonada por la constitución política, se hace necesario acudir a dicha norma para aclarar el asunto que acá se ventila, la que a su literalidad indica: **“Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal,**

no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, **contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada**". (Subraya y negrita fuera de texto)

Bajo esa senda, se tiene que el auto admisorio de la demanda inicial fue notificado al extremo demandado mediante providencia del 16 de noviembre de 2022, bajo el fenómeno de conducta concluyente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 301 del Código General del Proceso, pues con antelación no se habían desarrollado en legal forma los actos de enteramiento tal y como se expuso en el auto que impartió control de legalidad.

De manera que, el cómputo de los términos para dar aplicación del artículo 121 ibídem empezó a transcurrir desde ese momento, máxime que la demanda se admitió dentro del término de que trata el artículo 90 numeral 7 inciso 4 ídem. De donde, salta a la vista que a la fecha de este proveído han transcurrido tan solo dos (2) meses y dieciséis (16) días, sin tener en cuenta el tiempo que interrupción decretada ni los ingresos al despacho.

Por si fuera poco, tampoco prosperaría el pedimento por la siguiente razón:

La suscrita Juez asumió la titularidad de este despacho el día 10 de noviembre de 2021, de manera que los términos para la aplicación del artículo 121 del estatuto de ritos en lo procesal fueron interrumpidos, tal como lo tiene instituido la Corte Suprema de Justicia, quién en Sentencia STC12660-2019 a cargo del Magistrado Ponente Luis Alonso Rico Puerta dijo que:

*"Conforme con ello, dado el cariz personal del referido lapso legal, cuando un funcionario toma posesión como juez o magistrado de un despacho judicial vacante, por vía general habrá de **reiniciarse el cómputo del término de duración razonable del juicio señalado en el ordenamiento procesal, en tanto resulta desproporcionado mantener el curso del que venía surtiéndose previamente -y sin posibilidad de intervención de su parte-, máxime cuando su incumplimiento es necesariamente tomado en cuenta como factor de evaluación de su gestión.***

3.3. Sobre el particular, resulta pertinente recordar la sólida jurisprudencia que viene construyendo la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, en la que -con relación al carácter personal del término mencionado- ha sostenido lo siguiente:

"De la norma transcrita [artículo 121 del Código General del Proceso], se deriva que en efecto, el legislador determinó una causal de pérdida de competencia, basándose en el trascurso del tiempo para proferir decisión de fondo, lo que quiere decir, que se le otorga a la autoridad judicial un tiempo determinado para que resuelva el asunto que tenga

a su haber, so pena de que lo tenga que asumir otro funcionario judicial por la demora en tomar una determinación en los plazos establecidos en la ley, esto con el fin de que se le garantice a las partes dentro de un proceso, un acceso eficaz a la administración de justicia.

Por lo dicho, se tiene que la norma refiere a una obligación que recae en el funcionario, al punto que además de la pérdida de su competencia, la norma le adjudica esa circunstancia como criterio obligatorio de calificación, de lo que se deriva una consecuencia de carácter subjetivo del juez de conocimiento que tiene implicaciones adversas al funcionario, sin atender circunstancias particulares que como en este caso acontece con el cambio de titular del despacho.

Lo anterior, **llevaría al absurdo de que un juez que llega a desempeñar el cargo faltando escasos días para el vencimiento del término otorgado en la norma previamente citada y que ya hubiere sido prorrogado por su antecesor, le generaría graves consecuencias en su calificación de desempeño por una conducta que no le es endilgable.** También se puede presentar la indeseable consecuencia que genere la pérdida de competencia de manera desmedida, que conlleve a la congestión de los despachos que sigan en turno, ya que no se puede desconocer la actual situación en la que se encuentra la Rama judicial en nuestro país, frente alta carga de procesos que los funcionarios tienen para resolver”.

Y para ahondar en mas razones, la intención de nulidad se encuentra saneada, si se tiene en cuenta que el apoderado-demandado, actuó de manera anticipada a la solicitud que hoy se dirime sin proponerla como así lo tiene dispuesto la precitada Corporación en reiterada jurisprudencia, en particular en la Sentencia SC3377-2021 Radicación 1500131100022014-0008201, tras indicar:

“Deviene, como efecto de este pronunciamiento, que la extinción del marco temporal para el ejercicio de la función jurisdiccional no conduce inexorablemente a la pérdida de competencia del funcionario cognoscente, ni a la nulidad de los actos proferidos con posterioridad, pues en los casos en que haya saneamiento expreso o tácito se quebrantarán tales consecuencias, dentro del marco del artículo 136 del CGP, a saber:

La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. 2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada... 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

Dicho de otra manera, queda fuera de dubitación que, con ocasión de la exclusión del ordenamiento jurídico de las expresiones «de pleno derecho» y «automática», contenidas en el original canon 121 del CGP, **para que se produzcan los efectos invalidantes después de agotado el tiempo para sentenciar, es indispensable que alguno de los sujetos procesales**

invoque este hecho antes de que actúe o de que se profiera el veredicto final, pues en caso contrario se saneara el vicio y se dará prevalencia al principio de conservación de los actos procesales.” (subrayas propias)

Sean suficientes los argumentos, para concluir que tampoco le asiste razón al abogado-demandado, señor Rivera Vélez en punto al pedimento que elevó en su recurso de reposición con relación a la comunicación a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Lo relacionado con la recusación y la nulidad de la que hace alusión el inconforme, serán resueltos en providencia aparte.

El Colofón, se mantendrá incólume la decisión fustigada y se denegará el recurso de apelación en subsidio, en tanto el auto atacado no es de aquellos que taxativamente se enliste en el artículo 321 del Código General del Proceso ni en norma especial, como se verá reflejado en la parte resolutive.

IV. DECISIÓN

Colorario a lo anterior y sin comentarios adicionales sobre el particular, el Juzgado Treinta y Uno (31) Civil Municipal de Oralidad de Bogotá D.C, administrando justicia y en nombre de la República de Colombia,

V. RESUELVE

PRIMERO: NO REVOCAR el auto de fecha 06 de diciembre de 2022, por lo anteriormente expuesto.

SEGUNDO: NO CONCEDER el recurso de apelación, puesto que ninguna de las decisiones controvertidas es susceptible de alzada.

TERCERO: Por secretaría, contabilícese el término con el que cuenta el extremo demandado para contestar la reforma de la demanda y ejercer su derecho de contradicción en relación con el dictamen pericial que adujo el demandante (artículo 228 del CGP), vencido el cual vuelva el expediente al despacho para continuar con el trámite procesal que corresponde.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (4)

FIRMA ELECTRONICA
CLAUDIA RODRÍGUEZ BELTRAN
JUEZ

La providencia anterior se notificó por estado electrónico N° **06** del **09 DE FEBRERO DE 2023**, fijado en la página web de la Rama Judicial con inserción de la providencia para consulta en el siguiente enlace.

Firmado Por:

Claudia Yamile Rodriguez Beltran

Juez

Juzgado Municipal

Civil 031

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dfc59f1bf576101bc573ef66373c622a2cc3ff004a8e98e96d499f6153c7b1ae**

Documento generado en 08/02/2023 12:56:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>